

Residencias de personas mayores 2026: Seguridad como ventaja competitiva

Informe estratégico Vigento



Índice de contenidos

INTRODUCCIÓN

04

CONTEXTO NORMATIVO

05

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y
VULNERABILIDADES

06

VULNERABILIDADES
CRÍTICAS

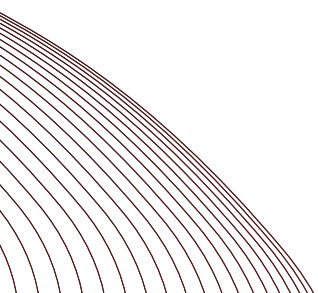
08

RECOMENDACIONES
ESTRATÉGICAS

09

CONCLUSIÓN

10



Introducción

En 2025, el sector de residencias para personas mayores en Cataluña se encuentra ante un contexto regulatorio en evolución, marcado por el anteproyecto de la Ley de los Instrumentos de Provisión del Sistema Público de Servicios Sociales y la futura Agencia Pública de Servicios Sociales de Cataluña. Estas iniciativas anticipan un marco de mayores exigencias, fiscalización rigurosa y responsabilidades ampliadas para los operadores del sector.

La administración ha comenzado a implementar medidas piloto con equipos interdisciplinarios y evaluaciones cuyo despliegue se extenderá a todas las residencias durante el primer trimestre de 2025. Este nuevo escenario normativo implica inspecciones más frecuentes y públicas, con importantes consecuencias legales y reputacionales derivadas del incumplimiento normativo.

Los modelos tradicionales basados en planes estáticos de autoprotección han demostrado ser insuficientes frente a esta realidad dinámica. La dirección de los centros debe gestionar emergencias, auditorías y responsabilidades crecientes, muchas veces con recursos limitados y bajo presión operativa. Se observa que una parte significativa de los Planes de Autoprotección no se aplica de manera efectiva, lo que constituye un riesgo crítico en un contexto sancionador más exigente y con mayor escrutinio público.

Este informe ha sido elaborado por **Vigento Public Affairs**, consultora estratégica especializada en **seguridad, gobernanza y asuntos públicos**, que opera en entornos complejos de seguridad y emergencias. Su enfoque integral en **gestión de crisis, continuidad operativa y comunicación institucional** para fortalecer estos entornos, ayuda a que el sector sociosanitario opere con los mismos estándares de seguridad y gobernanza que las infraestructuras críticas.

Contexto normativo

En 2025, el sector residencial para personas mayores en España atraviesa una transformación normativa profunda que impacta en toda la cadena de valor desde la provisión hasta la supervisión y financiación. Normativas recientes, como la Ley de los Instrumentos de Provisión del Sistema Público de Servicios Sociales y la futura Agencia Pública de Servicios Sociales (con despliegue en varias comunidades), establecen nuevos estándares en calidad, gobernanza y responsabilidad, aumentando las exigencias regulatorias.

La heterogeneidad autonómica genera desafíos para la aplicación homogénea y efectiva de inspecciones y sanciones, incrementando riesgos reputacionales y operativos para los operadores. A su vez, la puesta en marcha de equipos interdisciplinarios para la integración sociosanitaria mejora la trazabilidad y el control, pero impone una mayor complejidad en la gestión.

Los principales riesgos y vulnerabilidades del sector vinculados a este contexto regulatorio incluyen:

- **Fiscalización cada vez más rigurosa y pública**, que incrementa el riesgo reputacional y puede afectar la captación y financiación.
- **Régimen sancionador más estricto**, que obliga a anticipar incumplimientos y desplegar medidas correctivas rápidas.
- **Escasez y rotación de talento sanitario y asistencial** especializado, con consecuencias directas en la calidad del servicio y cumplimiento de protocolos.
- **Altos niveles de incumplimiento en Planes de Autoprotección (PAU)**, con más del 80% no actualizados o implementados correctamente.
- **Fragmentación normativa** y desigualdad en la supervisión y aplicación de la regulación que genera brechas territoriales.
- **Necesidad creciente de incorporar digitalización y tecnologías** para auditorías, gestión de riesgos y transparencia.
- **Mayor alineación de la financiación pública** con resultados sociales medibles, bajo esquemas de contratos de impacto.

Este marco exige a las residencias una gestión de riesgos integrada y avanzada, con liderazgo comprometido en la innovación, cumplimiento y desarrollo sostenible para garantizar la viabilidad y confianza social en el sector.

Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades

Demografía y demanda creciente

España cuenta con más de 10 millones de mayores de 65 años, con un segmento creciente de octogenarios. Sin embargo, la cobertura actual es insuficiente; existen aproximadamente 407.000 plazas residenciales, con un déficit cercano a las 100.000 plazas para alcanzar la ratio recomendada de 5 plazas por cada 100 personas mayores (Inforesidencias 2025, IMSERSO 2023). La tasa de ocupación se mantiene sólida en torno al 85-90%, presionando la capacidad operativa y gestionando listas de espera crecientes y desigualdades territoriales.

Riesgo Operativo: Recursos Humanos y Gestión

El envejecimiento y déficit de personal sanitario y asistencial, con tasas elevadas de profesionales mayores de 55 años (OECD), dificulta la continuidad y calidad asistencial. La rotación y absentismo agravan la vulnerabilidad operacional. Modelos de autoprotección insuficientes y recursos limitados reducen la resiliencia ante emergencias (ENISA 2024).

Incremento de amenazas digitales y emergencias

El sector sociosanitario experimenta un aumento del 35% en ciberataques y amenazas híbridas desde 2023 (ENISA, Informe 2024), afectando a sistemas críticos y poniendo en riesgo la continuidad del servicio. Al mismo tiempo, sucesos como el apagón eléctrico masivo de abril 2025 evidencian la vulnerabilidad energética de muchas residencias, con costes económicos y riesgos sanitarios significativos.

Entorno regulatorio y supervisión más exigente

En 2025, las inspecciones a residencias se han incrementado en un 50% (Observatorio de la Residencia, 2024), con más de la mitad acabando en sanciones derivadas de deficiencias en la aplicación y actualización de planes de autoprotección. En este contexto, sólo un 20% de las residencias mantiene planes activos y adaptados a la realidad operativa, evidenciando una brecha creciente entre normativa y práctica.



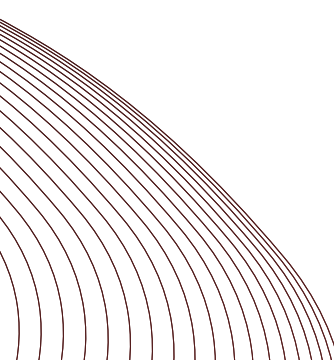
Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades

Riesgos Ambientales y Emergencias

Fenómenos climáticos extremos, vulnerabilidades energéticas y emergencias sanitarias recientes (apagones, pandemia) manifiestan riesgos crecientes para la operatividad y salud de la población residente (OMS, Estrategia Salud Global 2025-2030). Las residencias, con costes económicos y riesgos sanitarios significativos.

Limitaciones de los planes tradicionales

Los Planes de Autoprotección tradicionales, según estudio, no cumplen con su función práctica en más del 80% de los casos, por tratarse de documentos estáticos, inconexos con los procesos diarios, y sin una implicación real del personal.



Vulnerabilidades críticas

Saturación y Déficit Estructural en Plazas Residenciales

España presenta un déficit de aproximadamente 89.324 plazas residenciales para alcanzar la ratio recomendada de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años (Inforesidencias, 2025). Este déficit, junto con una tasa de ocupación del 85-90%, genera listas de espera extensas y expone al sistema a riesgos de sobrecarga del personal, deterioro en la calidad asistencial y vulnerabilidad ante situaciones de emergencia (IMSERSO, 2023).

Dificultades en Retención y Formación del Personal

La alta proporción de profesionales mayores de 55 años y la dificultad para atraer nuevo talento especializado limita la capacidad operativa y aumenta el riesgo de errores y ausencias, afectando la calidad y seguridad del cuidado.

Deficiencias Tecnológicas e Insuficiente Inversión en Seguridad Digital

La inversión en tecnologías digitales y ciberseguridad es insuficiente y fragmentada, dejando a muchas residencias vulnerables a ciberataques y fallos operativos que pueden comprometer la continuidad del servicio y la protección de datos sensibles (ENISA, 2024).

Planes de Autoprotección (PAU) Desactualizados y Poco Dinámicos

Más del 80% de los PAU son documentos estáticos, no actualizados ni integrados en la operativa diaria. Esta falta de revisión continua limita la capacidad de respuesta ante emergencias reales, disminuye la eficacia preventiva y representa un riesgo significativo ante accidentes, emergencias sanitarias o ciberataques (Gaceta Sanitaria, 2025).

Fragmentación Normativa y Desigual Aplicación Territorial

La disparidad normativa y en la supervisión entre comunidades autónomas dificulta la gestión homogénea de riesgos, generando brechas en la calidad y seguridad del sector.

Seguridad Física de las Instalaciones

Aunque la normativa española establece estándares claros para la seguridad física —incluyendo sistemas de extinción de incendios, puertas cortafuego, zonas ignífugas y rutas de evacuación accesibles—, no todas las residencias cumplen estrictamente estos requisitos. Deficiencias en mantenimiento y supervisión, junto a una capacitación irregular del personal, incrementan la vulnerabilidad ante emergencias y comprometen la seguridad integral de los residentes (BOE, 2024; informes sectoriales).

Recomendaciones estratégicas

Impulsar una inversión sostenida para cerrar el déficit estructural de plazas residenciales, priorizando proyectos innovadores y sostenibles que incluyan modelos alternativos de convivencia, como unidades pequeñas y personalizadas, para mejorar la calidad del servicio y la satisfacción tanto de residentes como de empleados (Inforesidencias, 2025).

Desarrollar políticas integrales de atracción, formación y retención del talento sanitario y asistencial, que contemplen condiciones laborales competitivas (salarios adecuados, horarios flexibles, beneficios sociales), formación continua y desarrollo profesional, participación activa en la toma de decisiones y programas de bienestar emocional. Estas medidas contribuyen a reducir la rotación que actualmente oscila entre 8% y 10% en el sector (Inforesidencias, UGT, 2024).

Fortalecer la ciberseguridad mediante protocolos integrados y tecnologías de monitoreo en tiempo real, asegurando la protección de datos sensibles y la continuidad operativa, en línea con la Directiva NIS2 y planes nacionales que promueven la resiliencia digital (ENISA, INCIBE, 2024-2025).

Homogeneizar la regulación y mejorar la supervisión mediante inspecciones predictivas y sistemas auditables, promoviendo la coordinación interinstitucional para reducir desigualdades territoriales y asegurar el cumplimiento normativo uniforme (Observatorio Residencial, 2024).

Adaptar los planes de autoprotección hacia esquemas dinámicos, integrados en la operativa diaria y en la cultura organizacional, impulsando revisiones periódicas, capacitación integral del personal y uso de herramientas digitales de gestión de riesgos para aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias, accidentes o ciberataques (Gaceta Sanitaria, 2025).

Conclusiones

El sector de residencias para personas mayores en España enfrenta en 2025 un escenario complejo, caracterizado por un déficit estructural significativo en plazas residenciales, estimado en cerca de 89.000, que se suma a una población envejecida y una demanda creciente que supera la oferta actual. La tasa de ocupación sostenida entre el 85% y 90%, junto con listas de espera, genera presión operativa y riesgos asociados a la calidad y sostenibilidad del servicio.

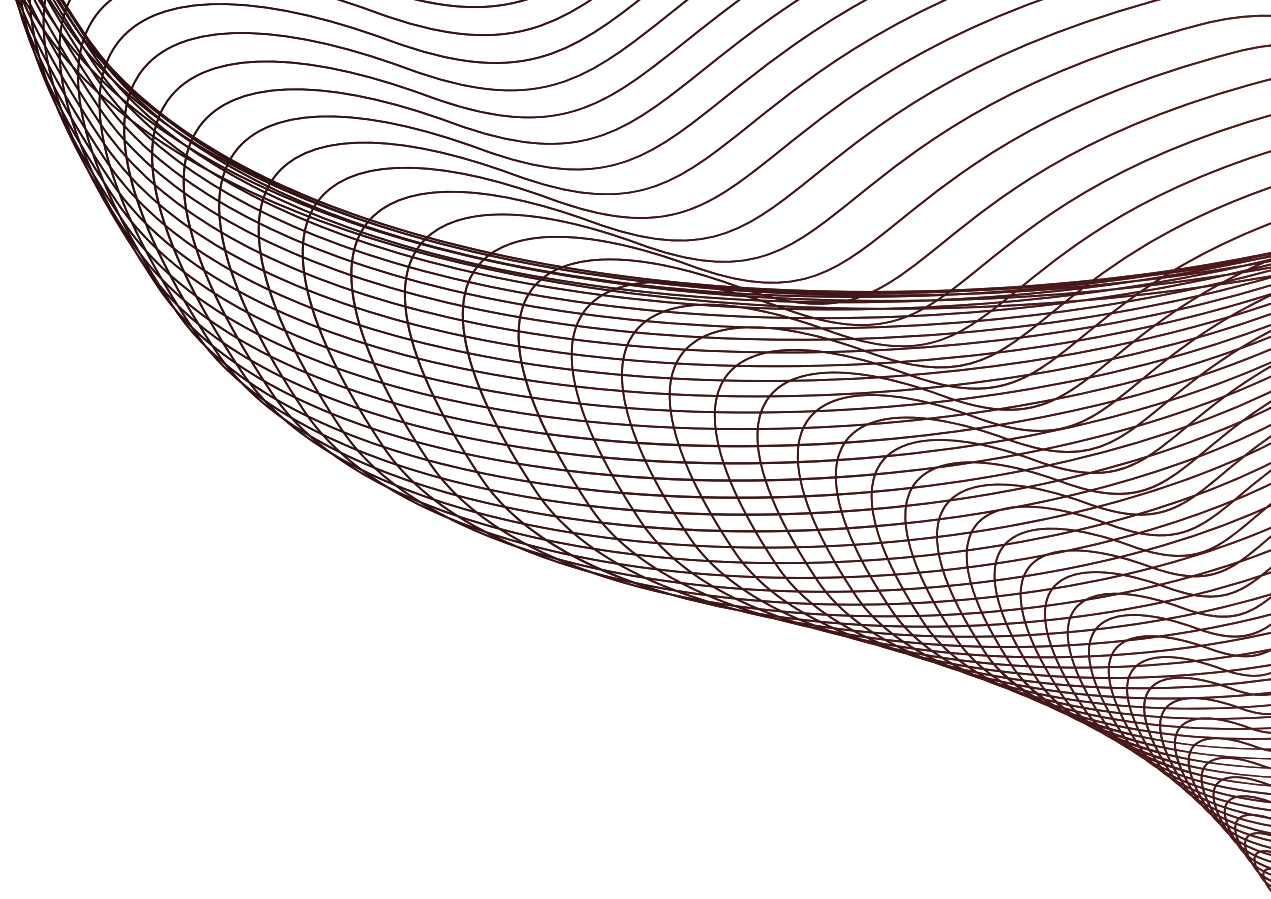
La evolución normativa reciente introduce estándares más exigentes en gobernanza, calidad y fiscalización, con un régimen sancionador estricto y una mayor fiscalización pública, que obliga al sector a mejorar sus protocolos, especialmente en la actualización y aplicación efectiva de Planes de Autoprotección, donde se detectan altos niveles de incumplimiento.

El déficit de talento sanitario y asistencial especializado, junto con desafíos tecnológicos y la insuficiente inversión en ciberseguridad, configuran vulnerabilidades que ponen en riesgo la continuidad operativa y la protección de datos sensibles. Asimismo, las instalaciones físicas presentan brechas en la implementación y supervisión de medidas de seguridad contra incendios y emergencias.

El impacto de la pandemia evidenció vulnerabilidades estructurales y organizativas, tales como limitaciones en el control de infecciones, coordinación sociosanitaria y capacidad de respuesta ante crisis sanitarias, enseñanzas que han impulsado una transformación hacia una gestión más integrada y resiliente.

Frente a este contexto, se requiere una estrategia integral que combine una inversión sostenida para ampliar plazas con modelos innovadores y sostenibles, políticas robustas para atraer y retener talento, fortalecimiento de la digitalización y ciberseguridad, homogeneización regulatoria y supervisión efectiva, y modernización de planes de autoprotección para una gestión dinámica y orientada a resultados.

Solo con un liderazgo estratégico comprometido y un enfoque proactivo en gobernanza y calidad se podrá garantizar la viabilidad, seguridad y confianza en el sistema residencial para mayores, asegurando su papel fundamental en el bienestar y cohesión social del país a futuro.



Informe estratègic Vigento

